



Resumen de Prensa

miércoles, 14 de septiembre de 2022

La obra del túnel de Panaderos se retrasa hasta enero, el doble del tiempo previsto

● Saravia fija para «primeros de 2023» una obra que debería estar acabada en septiembre ● Del Olmo (PP) asegura que Puente y su equipo «están tirando el dinero» en lugar de apostar por el soterramiento

L. ARRUE VALLADOLID

Cuatro meses, en el cálculo más optimista, es el retraso que acumula la obra del túnel de Panaderos que comenzó oficialmente el 28 de abril de 2022, por un plazo de cinco meses, según el Ayuntamiento. La realidad es que está en el ecuador de los trabajos, con previsión de término en enero de 2023, ante la indignación de vecinos y comerciantes de la calle, que sufren una drástica caída de clientes y de ventas, además del veto de entrar en los garajes, amén de las molestias del ruido de las obras.

Este diario palpó ayer el malestar de los residentes y empresarios de la zona, y todos convergieron en una queja común: ausencia total de información por parte del Ayuntamiento y sensación de abatimiento: «Esto va para largo», indicaron fuentes de un comercio de Panaderos.

En esta calle tiene su tienda de colchones el presidente de la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), Alejandro García Pellitero, y aunque recalco que solo habla de su negocio, el balance no puede ser más desolador, especialmente desde el mes de julio. Todos los lunes publica en su twitter fotos del estado de la obra. Pequeña reseña gráfica que denota la ansiedad por volver a la normalidad en la movilidad.

Su decepción se basa en dos constataciones: el final de la obra es lejano, a su juicio, y la nula presencia de clientes desde julio le lleva a pensar si los va a perder para siempre.

«CREO QUE FALTAN MESES»

Sobre el estado de las obras fue claro. «Lo que falta es instalar un colector de 1,20 de diámetro desde la calle Estación a Panaderos, por la acera de los números pares, para empezar a hacer la rampa del túnel. Luego tienen que instalar una tubería más pequeña por la acera de los impares, antes de colocar los pilotes de la rampa de salida del túnel. Estamos ya en el descuento. Creo que faltan dos o tres meses, sólo para recuperar la circulación. La Policía Municipal publicó en su twitter en marzo que estaría hábil el tráfico en superficie el 28 de agosto, sin hablar del funcionamiento del túnel que se demoraría más. Ahora ya llevamos tres semanas de retraso sobre esta primera fase», recalco.

Sobre los efectos en su negocio, aseguró que el desplome de ventas desde julio es histórico en la evolución de su comercio. «Si se prolonga mucho la obra, nos hundimos. El mes de agosto y las dos semanas de septiembre, han sido de un parón im-



Operarios, ayer, en las obras del túnel de Panaderos en la esquina de la calle Estación. PHOTOGENIC



Saravia en una visita en el comienzo de las obras en Panaderos. E.M.

«NOS HAN DEJADO UNA Balsa DE AGUAS FECALES EN FERIAS»

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, aseguró ayer a este diario que el final de la obra está previsto a principios de año, especialmente los pasos de Panaderos y peatonal, con toda la urbanización de la zona. «El paso de Labradores vendrá después. La previsión es que esté concluido en el primer trimestre», indicó el edil. Saravia se refirió también al posible derecho de compensación para los dueños de plazas de garaje que se han quedado sin clientes, al quedar los estacionamientos sin uso.

«El caso de la indemnización es similar a I de la Plaza Mayor. Cuando acaben las obras los afectados pedirán la indemnización, se estudiará y, en su caso,

se compensará. Como se hizo con los negocios de la calle Jesús. Pero solo al final, una información que ya conocen, creo, los afectados», concluyó.

El titular de Urbanismo respondió así a quejas como las que plantearon dueños de plazas de garajes de la calle Panaderos, como Juan José Polo, propietario, junto a otros dos hermanos, de 45 plazas en la calle Loza, que se cerró al tráfico el pasado 13 de julio. «Desde entonces, no tenemos negocio y antes ya se fueron varios arrendatarios que vieron el panorama en marzo y se fueron», indicó. Otro residente de la zona añadió un contratiempo más 'sucio'. Según relató, la obra del colector les han dejado una balsa de aguas fecales durante las fiestas donde apenas han trabajado. «Era un hedor nauseabundo. Protestamos y vinieron un domingo a retirar las inmundicias con una bomba», dijo.

presionante, y no es fácil reclamar lucro cesante con un negocio abierto. Lo peor es que el propietario de un negocio no sabe si va a recuperar al cliente 'perdido' en estos meses».

RETRASO DE ANDRÓMEDA

Pellitero añadió otras consecuencias negativas para los residentes de la zona, ya que se han topado con la picaresca de dueños de plazas de garaje de áreas aledañas que les han ofrecido sus estacionamientos en alquiler, pero al doble de precio. «Donde se pagaban 60 o 70 euros, ahora han pasado a 120 o 130 de renta mensual con el aviso de que hay interesados en espera. Así de triste».

En la misma línea, la presidenta del Grupo Municipal del PP, Pilar del

Olmo, criticó la demora en los trabajos del túnel, aunque agregó que es algo «habitual» en el mandato de Puente.

«Como todas las obras que ha iniciado, se retrasa y por mucho tiempo. Tengo que recordar que fue motivo de una discusión en un debate en un Pleno. Nos llamaron necios y Puente dijo que iba a estar muy encima», apuntó Del Olmo, para incidir que los hechos le dan la razón, como en el túnel de Andrómeda «donde el retraso ha sido de cinco años», indicó.

La política popular recordó que Panaderos se iba abrir al tráfico y para el acceso a garajes y comercios en septiembre, situación que ve muy lejana a fecha de hoy por el estado de las obras, con los colectores aún en fase de instalación. «Nunca han cumplido un plazo y es verdad que surgen problemas, pero no se entiende que fijen plazos que no son realistas», aseguró.

«PUENTE TIRA EL DINERO»

Del Olmo aseguró que el avance en túneles y pasos transversales no solo no aleja el proyecto de soterramiento, sino que, de alguna forma, lo refuerza. «Ahora está tirando el dinero. La prueba se ha visto en Madrid con los 7 kilómetros soterrados entre Atocha y Chamartín con 322 millones de inversión. En Valladolid es la apuesta también, porque hay fondos de Next Generation, si se hubiesen pido, o apostando por hacer el soterramiento a tramos», concluyó.

Piden a la Junta unidad de criterio para evitar discriminaciones fiscales

El anteproyecto de rebajas tributarias incluye dos definiciones diferentes de lo que considera ruralidad

SUSANA ESCRIBANO

VALLADOLID. ¿Qué es un poblador rural? De la respuesta a esa pregunta depende, en el caso de Castilla y León, el acceso a las rebajas tributarias que prepara la Junta. Y no hay unidad de criterio. El Gobierno autonómico incluye dos definiciones diferentes de lo que considera ruralidad en un mismo anteproyecto de ley, el que regula las rebajas fiscales anunciadas en abril, tras el primer consejo de la coalición de PP y Vox. Eso va más allá de una cuestión del lenguaje y tiene una trascen-

dencia jurídica y, en este caso, tributaria. De esa manera, un contribuyente que podría acogerse en Castilla y León a una bonificación mejorada en el Impuesto de Transmisiones por la compra de un inmueble para que sea sede de una empresa en una población rural podría tener vetado el acceso a una desgravación reforzada en el IRPF de hasta 3.300 euros por el nacimiento del tercer hijo si la familia reside en un pueblo y se tendría que conformar con los 2.351 de la cuota general.

Sobre esa distorsión ha alertado el Consejo Consultivo de Castilla y León al Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco, en un informe en el que analiza minuciosamente el texto del anteproyecto de ley en el que recomienda unificar y pulir requisitos en una sola definición para

evitar situaciones discriminatorias.

El texto refleja una falta de unidad de criterio que, a juicio del organismo encargado de ejercer el control de calidad de los textos normativos en Castilla y León, «puede resultar discriminatoria». En el caso de los apoyos a la natalidad, la mejora tributaria está orientada a residentes en «municipios de menos de 5.000 habitantes». En una comunidad con muchas entidades locales menores y núcleos adscritos, esa redacción excluiría a habitantes de poblaciones pequeñas, claramente rurales, que forman parte de un municipio de más de 5.000 habitantes. Esa situación se da, por ejemplo, con pedanías de la villa segoviana de Cuéllar.

El criterio de «municipios de menos de 5.000 habitantes» cam-

bia totalmente párrafos adelante para regular la ruralidad, en la bonificación especial que prevé una tarifa del 2% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (frente al 8% del tipo general) por la compra de un inmueble en un pueblo para una actividad empresarial. El anteproyecto fija en este caso el acceso a esa ventaja tributaria para adquisiciones situadas «en un municipio o [aquí sí] en una entidad local menor» de hasta 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia.

La Junta, incluye en este último caso, una corrección a la baja en el número de residentes para las localidades ubicadas en alfores de ciudades, que gozan de un empuje demográfico por su situación que no se da en el común del medio rural. Pero esta distinción no se aplica en el caso de las bonificaciones por nacimiento o adopción.

El anteproyecto está en puertas de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a las Cortes para su tramitación.

El precio de los alimentos se desboca y leche, huevos y aceite suben más de un 20% en un año

La bajada de la gasolina contribuye a moderar al 10,5% la inflación en agosto, pero los básicos de la cesta de la compra siguen disparados

CLARA ALBA

MADRID. Las malas noticias para el bolsillo de los consumidores se suceden. Es cierto que la espiral alcista de precios parece haber tocado techo, con la inflación situándose en una tasa interanual 10,5% en agosto, tres décimas por debajo del pico del 10,8% alcanzado en julio (su nivel más alto desde septiembre de 1984). Sin embargo, la ligera moderación que pone fin a una racha de tres meses consecutivos de subidas se ha quedado corta respecto a la estimación inicial.

En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) anticipó hace unas semanas que el dato se situaría en el 10,4%, una décima por debajo del finalmente registrado. Y no hay que olvidar que el índice de precios de consumo (IPC) sigue anclado en cotas de doble dígito que mantienen en alerta a Gobierno, empresas y hogares, ante la pérdida de poder adquisitivo que se está generando en los últimos meses.

Por su parte, la inflación subyacente —considerada como la más persistente al excluir alimentos no elaborados y productos energéticos— también se incrementó en agosto tres décimas, hasta el 6,4%. Es su valor más elevado desde enero de 1993.

En términos generales, se puede concluir que la caída de los precios de la gasolina en las últimas semanas está detrás de la moderación del IPC respecto a julio. Pero el peso de los precios de la electricidad y de los alimentos ha impedido un descenso superior. Preocupa sobre todo el encarecimiento de muchos productos básicos; bienes de primera necesidad en los que la deman-

da no suele variar en exceso al no poder ser sustituidos. Es decir, afectan mucho las rentas bajas.

Los españoles pagaron en agosto un 13,8% más que hace un año por alimentos y bebidas no alcohólicas, tres décimas por encima de la tasa registrada en julio y la más alta desde el comienzo de la serie en enero de 1994. Solo hay un índice de los que componen el IPC, el de vivienda (que agrupa suministros como agua, electricidad o gas) que ha registrado un alza superior, del 11%.

Pero el encarecimiento de los alimentos es lo que más preocupa a las familias, con subidas de más del 20% en el último año, el doble que el índice general, en básicos imprescindibles de las despensas. Sorprende especialmente el caso de productos de primer orden como la leche, cuyo precio se ha disparado casi un 26% en los últimos 12 meses.

El aceite lo ha hecho en un 24%, mientras que el alza de huevos y cereales ronda el 22%. Otros habituales del carrito de la compra como los cereales se han encarecido en un 21%, mientras que el pan o la carne de vacuno lo hacen en el entorno de un 15%, igual que las patatas, las legumbres y las hortalizas frescas.

En total, de las 57 rúbricas que los técnicos del INE publican mes a mes, 20 de ellas registran subidas a doble dígito en solo un año. Y cerca se queda el pescado fres-

LA CLAVE

6,4%

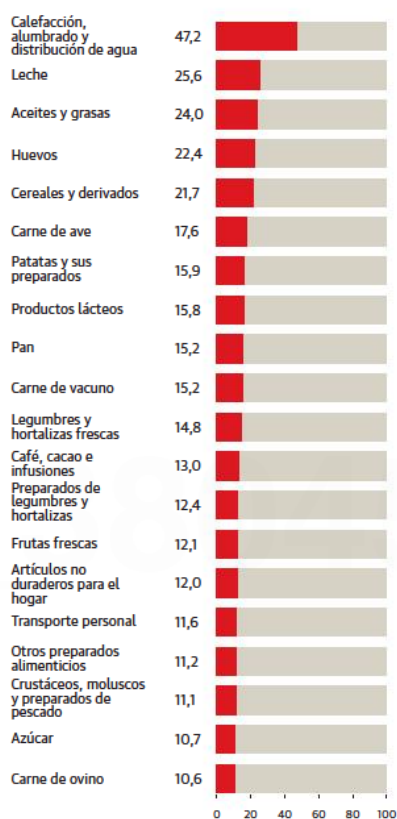
es el nivel más elevado registrado en el IPC subyacente desde enero de 1993.

ALZAS GENERALIZADAS

De las 57 rúbricas analizadas por el INE, un total de 20 registran subidas a doble dígito

Lo que más ha subido en el último año

Variación %



Fuente: INE.

GRÁFICO R.C.

co, con un alza ya del 9,9%.

Si se pone el foco en la subida experimentada en solo un mes, los datos también llaman a la prudencia. La leche se encarece un 2,5% entre julio y agosto, mientras que los cereales lo hacen en un 1,4%. El turismo y la hostelería también subieron un 0,8% en el periodo de vacaciones por excelencia, cifra que escala al 8,5% si se compara con agosto de 2021.

El Banco de España alertaba esta misma semana de la presión alcista que los sectores del ocio, restauración y turismo están ejerciendo sobre la inflación. Y es que en los tres es superior a la registrada de media en la zona euro.

Previsiones de otoño

Desde el Ministerio de Economía confían en que la inflación se moderará en los meses de otoño. Esperan que haya una moderación de la demanda y se note ya la ayuda de medidas como el tope al gas, además de la caída en los precios de los carburantes.

Sin embargo, incluso los analistas más optimistas se han visto obligados a reconfigurar sus quinielas para el conjunto del ejercicio. Los últimos en hacerlo han sido los expertos de Funcas, que ayer elevaron del 8,9% al 9,1% su previsión de inflación media anual. «A corto plazo, la clave del éxito estará en que las medidas de los bancos centrales tengan un efecto real de contención» en los precios, tal y como explica Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. Una batalla que se antoja larga y difícil para las familias, ante el impacto que ya están teniendo las subidas de los tipos de interés en el encarecimiento de los créditos y de las hipotecas.

Del Pozo se suma a las voces que apuntan a que, si la estrategia no funciona, la zona euro marcharía a un escenario de estancamiento (inflación sin crecimiento). Sería —dice— «algo muy nocivo para los mercados y, naturalmente, para la economía real».

Dos de cada cinco familias ya han recortado un 10% su gasto

C. A.

MADRID. La subida de precios es imparable. Llenar la cesta de la compra con los mismos productos que antes se ha convertido en misión casi imposible para miles de familias que, mes a mes, deben hacer frente al encarecimiento de productos de alimen-

tación básicos, de la gasolina, de las facturas domésticas o de la hipoteca, entre muchos otros.

Ante la incertidumbre actual y el deterioro de su poder adquisitivo, muchos hogares se han visto obligados a cambiar sus hábitos de consumo. El objetivo que buscan con ello es reducir determinadas partidas de su presu-

puesto y poder asumir el alza de los precios de la energía.

Según un estudio de la consultora Kantar publicado ayer, dos de cada cinco hogares ya han contraído su gasto medio en un 10% respecto a hace un año.

El cambio de hábitos no compete solo a una mayor apuesta por las marcas blancas en el supermercado o a la reducción del número de productos con los que llenar el carrito de la compra. El informe de Kantar apunta a que se ha registrado una notable reducción en el nivel de desperdi-

cios, que ha descendido un 12,3% respecto a 2021. Del mismo modo, señala la simplificación creciente de menús, incrementándose asó el número de comidas con un plato único que, a cierre del primer semestre, representaba un 52,4% del total.

Esta misma semana, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, llamaba la atención sobre la necesidad de ofrecer alimentos de calidad a las familias más vulnerables. Unas palabras que llegaban tras la reunión mantenida junto a la vicepresidenta Yolan-

da Díaz con los grandes distribuidores, a los que se ha propuesto la elaboración de cestas básicas de la compra con precios congelados hasta después de Navidad.

El sector no ve útil la medida y defiende que lleva meses haciendo un «ingente esfuerzo» en márgenes para evitar trasladar todo el impacto de la inflación al consumidor final. Según la consultora citada, el 80% de las categorías de gran consumo han aumentado su precio medio por debajo del nivel del IPC. Eso sí, el 20% ha crecido por encima.

Bruselas propondrá un ahorro obligatorio de electricidad durante las horas punta

Los socios volverán a reunirse de forma extraordinaria el próximo 30 de septiembre para adoptar medidas que frenen el precio del gas

OLATZ HERNÁNDEZ

BRUSELAS. Los Veintisiete volverán a reunirse el próximo 30 de septiembre en un Consejo extraordinario de Energía para seguir discutiendo los mecanismos para limitar el precio del gas. Así lo anunció ayer el ministro de Industria de la República Checa, Jozef Síkela, quien sostuvo que los Estados miembros «están comprometidos» para lograr una solución común sobre los desorbitados costes de la energía.

Respecto a las propuestas que están sobre la mesa, la comisaria de Energía, Kadri Simson, afirmó que la Comisión tratará de lograr un compromiso para obtener un ahorro obligatorio de la electricidad en las horas punta.

La UE trabaja desde el verano para diseñar unos mecanismos que reduzcan la presión sobre la economía de la región. El anuncio de Rusia hace varias semanas de que no reanudará el suministro por el gasoducto Nord Stream 1 no ha hecho más que exacerbar la crisis energética.

Por ello, desde Bruselas se apresuran ahora para elaborar medidas que los países europeos puedan aprobar cuanto antes. «Esperamos lograr un acuerdo antes de la temporada invernal, por eso hemos convocado un Consejo extraordinario a finales de septiembre», destacó ayer Simson durante su intervención ante el Parlamento Europeo.

Algunas de las propuestas de

Los distintos Gobiernos están de acuerdo en limitar los beneficios de las tecnologías renovables y de la nuclear

la Comisión cuentan ya con un «apoyo amplio» de los Veintisiete. Los socios están de acuerdo en limitar los beneficios de las tecnologías inframarginales –las renovables y la nuclear– y en utilizar el excedente para apoyar a los consumidores vulnerables.

Dado que las compañías de petróleo, gas y carbón se han beneficiado del alto precio de la energía en los últimos meses, la UE pretende imponerles una tasa para proteger a la industria vulnerable y realizar inversiones en tecnologías más limpias. No obstante, también espera que se aprueben ayudas que den liquidez a las empresas energéticas.

Tope al gas

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario trabaja para topar el precio del gas que llega por gasoducto desde Rusia. La iniciativa cuenta con el rechazo de Hungría y con las reticencias de países como Alemania, ya que creen que puede poner en peligro la seguridad energética. «Se ha plantea-

do incluso topar todo el gas que llega a la UE, aunque aún debemos mirar qué problemas e implicaciones tendría», reconoció Simson ante los medios.

El continente ya ha llenado sus reservas de gas al 84%, en su mayoría gracias al gas importado desde Noruega, que es ahora principal suministrador de la UE.

Las autoridades de este país también se han mostrado «escépticas» sobre un posible tope a la energía que envía a Europa. «Un precio máximo no cambia la cuestión fundamental de que hay escasez de gas en el continente», sostenía al respecto esta semana el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

En España la demanda de gas para generación eléctrica registró un incremento del 85,7% entre enero y agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el gas convencional (destinado a los consumos domésticos, comerciales, industriales) cayó un 15,7%, según el Boletín Estadístico de Enagás.

Los empresarios españoles frenan en seco las contrataciones en la recta final del año

La incertidumbre económica lleva al país a tener la mayor caída mundial en expectativas de creación de empleo

LUCÍA PALACIOS

MADRID. El temor a una recesión asusta a los empresarios españoles, que han frenado en seco

su intención de contratar y aumentar plantilla en este último trimestre del año, hasta el punto de prácticamente paralizarlas, después de un año de crecimientos récord. Así lo refleja una encuesta sobre proyección de empleo publicada ayer por la consultora ManpowerGroup.

Los directivos prevén que el mercado del empleo tendrá un comportamiento casi plano por

el incierto panorama que se dibuja a causa del precio de la energía, la inflación y los cuellos de botella en el suministro de algunas materias primas. Todo ello con la invasión de Ucrania como telón de fondo. Por ello, sus previsiones de nuevas contrataciones para los últimos tres meses del año se sitúan en un 2% más frente al 21% que registraba en el trimestre previo y al 33% del mismo periodo del año anterior. Esto supone un recorte trimestral de 19 y 31 puntos, respectivamente, si se compara con el ejercicio precedente. Ambas protagonizan las caídas más significativas entre los 41 países analiza-

dos. Además, a nivel global, España es el cuarto peor mercado en cuanto a previsiones, 28 puntos por debajo de la media (30%).

Aunque se trata de una bajada generalizada con respecto al trimestre anterior, cinco de los once sectores analizados se mantienen en cifras positivas y anticipan un crecimiento del empleo en sus equipos para los próximos tres meses. A la cabeza se sitúa el tercer sector y las tecnológicas, con unas expectativas netas del 18% y del 17%. Por el contrario, otros cinco sectores prevén recortar sus nuevos puestos. La industria manufacturera sufre un fuerte recorte de 47 puntos y también se desploma la construcción y el sector primario.

ECONOMÍA

Un complicado camino para los impuestos extra

Todos los grupos temen que el gravamen a banca y energéticas recaiga en los clientes

MARISA CRUZ MADRID
El Congreso tramitará la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para establecer un impuesto temporal extraordinario a las entidades financieras y las grandes energéticas con el fin de que contribuyan a cubrir las necesidades acuciantes que la guerra en Ucrania ha impuesto a la economía y principalmente a los más vulnerables.

La iniciativa de los dos socios gubernamentales está sin embargo, aún, lejos de aprobarse. Los recelos de las formaciones parlamentarias, incluidas las que aceptan su toma en consideración, arrojan múltiples sombras sobre una propuesta que, si

finalmente obtiene el visto bueno de la Cámara, incluirá un abanico de retoques, cláusulas y matices pensados principalmente para evitar que los gravámenes se repercutan a los clientes, dar seguridad jurídica a los inversores, sortear el riesgo de inconstitucionalidad y eludir la invasión competencial.

Se trata de una iniciativa, que al haber sido presentada por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno, no cuenta con informe de los órganos constitucionales y del Banco Central Europeo. Además, en la actualidad está pendiente del análisis de Bruselas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

Al grupo de los recelosos que, hoy por hoy, no garantizan su voto final a la misma si se mantiene en sus términos actuales –unos la ven escasa, otros excesiva y otros invasiva–, se suman PNV, ERC, Junts, PdeCAT, Coalición Canaria y Bildu.

La diputada del PSOE, Patricia Blanquer, defendió la necesidad de «arrimar el hombro» y recordó que las seis energéticas del Ibex cuadruplicaron sus beneficios en 2021 y los cinco grupos bancarios del índice lograron casi 20.000 millones de ganancias. Aseguró que el control para evitar que los gravámenes se repercutan a los clientes corresponderá a la CNMC y al Banco de España y las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento serán del 150%.

Sólo la CUP respaldó sin reticencias la propuesta aunque dio un paso más reclamando expropiaciones. Bildu, por su parte, consideró que la proposición es pobre y la recaudación que pretende, muy escasa por eso pide que los impuestos «sean permanentes y más amplios» y acusa al Gobierno de invadir competencias del País Vasco y Navarra.

También el PNV alerta de la invasión competencial y avisa de que cualquier medida debe ser acorde con lo que estipule la UE. Este grupo mantiene que los gravámenes «no

van a reducir la inflación» e incluso augura que, a fuerza de improvisación, la iniciativa puede acabar anulada por los tribunales porque lo que plantea es gravar las cifras netas de

7.000 MILLONES EN DOS EJERCICIOS

El impuesto a las energéticas gravará su cifra de negocios anual con un tipo del 1,2% y el aplicable a la banca sus ingresos por intereses y comisiones con un 4,8%. Estarían en vigor en 2023 y 2024 y el Gobierno cree que recaudaría 1.500 millones anuales de los bancos y 2.000 de las energéticas. El impuesto energético se aplicará a las que tengan una cifra de negocios superior a los 1.000 millones en 2019. En el caso de la banca, el tributo se aplicará a las que en 2019 ingresaron al menos 800 millones brutos en comisiones e intereses.

negocio y no los beneficios extraordinarios. «Un galimatías», resumió el representante vasco que advirtió: «O hay concertación foral o nos opon-

dremos con todas nuestras fuerzas».

Ciudadanos denunció la insolvencia jurídica de la norma que utiliza la expresión «prestación patrimonial» para ocultar lo que es un impuesto que se solapará con el de Sociedades. Para Cs se trata de una propuesta «arbitraria e ideológica». Reprocha al Ejecutivo que pida sacrificios y él no se preste a ninguno y recuerda los 22.000 millones de recaudación extra que la subida de los precios ha proporcionado al Gobierno. ERC reclama que los impuestos sean permanentes mientras existan beneficios extraordinarios y garantías de que los mismos no se trasladarán a la ciudadanía. Para Esquerra, de momento, la iniciativa es un «parche» que no puede sustituir a una verdadera reforma fiscal.

Vox arremetió con dureza. «La propuesta plantea sobre lo inconstitucional, no solución nada y deteriorará el empleo y la seguridad jurídica», dijo Espinosa de los Monteros para quien la proposición demuestra la «deriva populista» del Gobierno.

El PP tampoco se quedó corto en la crítica. Para ellos, la iniciativa es un «engendro jurídico contrario a la economía de mercado». También el PP califica de «beneficios caídos del cielo» los 22.000 millones extra recaudados por Hacienda.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a Josep Borrell y Didier Reynders en Estrasburgo. EFE

Impuesto del 33% a la energía fósil y tope de 180 euros al megavatio

Von der Leyen presenta hoy su propuesta de recorte a los beneficios de las eléctricas y un tope al megavatio inframarginal para abordar la crisis energética

PABLO R. SUANZES ESTRASBURGO
ENVIADO ESPECIAL
La Comisión Europea va a presentar este miércoles una serie de propuestas para abordar la crisis energética, intentar asegurar el suministro du-

rante el próximo invierno, controlar los precios y «redirigir» los beneficios extraordinarios de las empresas que más se están beneficiando de la escalada energética. Entre los números que figuran en los borradores

que el martes debatió el Colegio de Comisarios hay una «contribución solidaria» eufemística de hasta el 33% sobre los ingresos extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles, un tope de 180 euros al me-

gavatio hora generado por energías inframarginales –como la nuclear y las renovables– y un intento de reducción obligatoria y lineal del 10% en el consumo eléctrico, que sería del 5% en las horas punta.

El pasado viernes los ministros del ramo discutieron de todo esto en Bruselas y dieron un mandato y orientaciones a la Comisión para que haga su propuesta legislativa. Hay mucha urgencia, nervios y enorme presión, pero hay pocas cosas más complicadas que el mercado de la

electricidad y sacar adelante todo el paquete va a llevar más tiempo. Por eso no hay todavía claridad sobre cómo poner un tope al precio del gas importado ni una solución técnica para aliviar a las empresas acuciadas por estrecheces de liquidez y exceso de colaterales a corto plazo. Hay negociaciones abiertas con los reguladores y Bruselas espera tener algo sólido en un par de semanas, antes del nuevo Consejo extraordinario de ministros que ha sido convocado para el 30 de septiembre.

El plan inicial era hacer el anuncio el martes, pero la presidenta Ursula von der Leyen pronunciará su discurso sobre el estado de la Unión Europea, una de las citas importantes de cada curso, este miércoles en Estrasburgo, en el pleno de la Eurocámara. Y su equipo ha decidido concentrar los anuncios en esa intervención, y luego desglosar cada parte del paquete con ruedas de prensa sectoriales a cargo de sus comisarios de aquí al lunes. Es algo que afecta a

Asuntos Económicos, pero también a Competencia por el marco de ayudas de Estado, a Medio Ambiente o Mercado Interior. Hay elementos cerrados, algunos que pueden ser retomados a última hora desde esos borradores y todo quedará pendiente de la negociación.

Lo que va a hacer la Comisión es sólo una propuesta. A partir de entonces se abre un proceso que, dependiendo de los instrumentos y la base legal, afectará sin duda a los gobiernos nacionales y quizás a la

Eurocámara. Los embajadores y después los ministros dirán hasta dónde están dispuestos a llegar y qué equilibrios son aceptables. Hay países que quie-

ren poner un tope al precio del gas que llega de Rusia, no como mecanismo para reducir los precios que paga la UE, sino para reducir los ingresos del Kremlin. Pero hay otros que no lo ven claro y capitales que preferirían poner un tope a todo el gas que llega de fuera de la UE, al de las tuberías y al que llega por barco, el gas natural licuado, incluso si eso supone enfadar a nuestros socios (Noruega, Argelia, Azerbaián) comerciales o incluso poner en riesgo el suministro.

Lo mismo ocurre con todas las partes. En España parece absurdo que se quiera poner ese tope de 180 euros el megavatio hora, pues está cuatro veces por encima de los precios que se pagaban en el pasado. Pero desde otras latitudes, como en La Haya e incluso Berlín, defienden que hay que preservar el mercado.

Von der Leyen hará el anuncio durante su discurso sobre el estado de la Unión